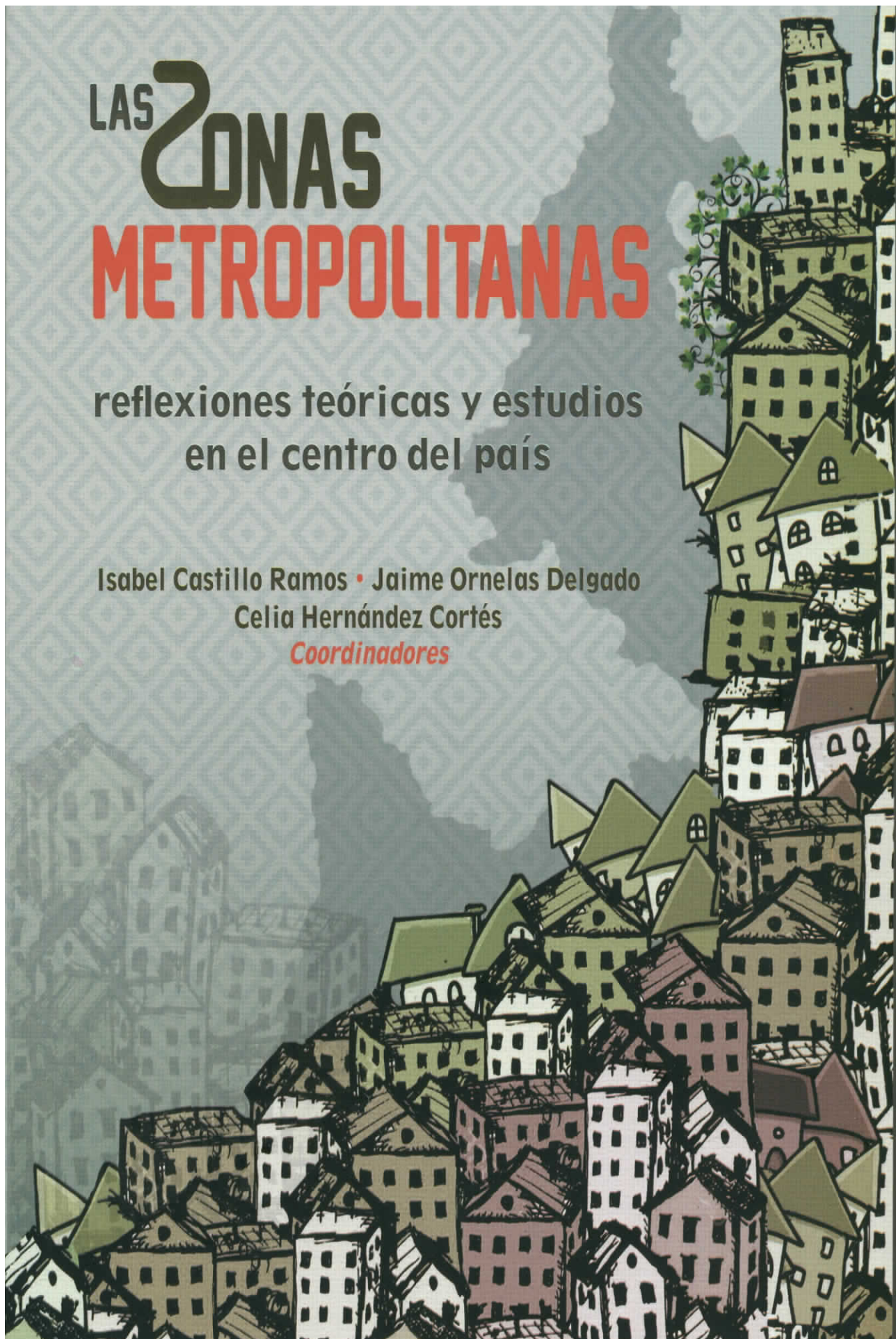


LAS ZONAS METROPOLITANAS

reflexiones teóricas y estudios
en el centro del país

Isabel Castillo Ramos • Jaime Ornelas Delgado
Celia Hernández Cortés
Coordinadores



LAS ZONAS METROPOLITANAS

**reflexiones teóricas y estudios
en el centro del país**

**Isabel Castillo Ramos • Jaime Ornelas Delgado
Celia Hernández Cortés**
Coordinadores



Universidad
Autónoma
de Tlaxcala

MAPorrúa
librero-editor • México

MÉXICO

2015

Esta investigación, arbitrada por pares académicos,
se privilegia con el aval de la institución coeditora.

307.14160972

L337

Las zonas metropolitanas : reflexiones teóricas y estudios en el centro del país / [coordinado por] Isabel Castillo Ramos ; Jaime Ornelas Delgado ; Celia Hernández Cortés -- 1ª ed. -- [Tlaxcala, Tlax.] : Universidad Autónoma de Tlaxcala ; México, D.F. : Miguel Ángel Porrúa, 2015 185 p. : mapas ; 17 × 23 cm. -- (Serie Estudios Urbanos)

ISBN 978-607-401-984-1

1. Urbanismo -- México. 2. Urbanismo -- Aspectos sociales -- México. 3. Urbanismo -- Aspectos económicos -- México

Primera edición, octubre del año 2015

© 2015

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

© 2015

Por características tipográficas y de diseño editorial

MIGUEL ÁNGEL PORRÚA, librero-editor

Derechos reservados conforme a la ley

ISBN 978-607-401-984-1

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de GEMAPORRÚA, en términos de lo así previsto por la *Ley Federal del Derecho de Autor* y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.

IMPRESO EN MÉXICO



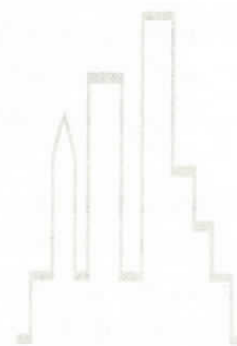
PRINTED IN MEXICO

LIBRO IMPRESO SOBRE PAPEL DE FABRICACIÓN ECOLÓGICA CON BULE A 80 GRAMOS

www.maporrúa.com.mx

Amargura 4, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 México, D.F.

Índice



PRÓLOGO

Isabel Castillo Ramos

Jaime Ornelas Delgado

Celia Hernández Cortés 5

INTRODUCCIÓN

Celia Hernández Cortés

Jaime Ornelas Delgado

Isabel Castillo Ramos 9

LO URBANO Y LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA

Jaime Ornelas Delgado 17

Introducción: apunte teórico metodológico 17

Circulación del capital 22

Circulación del capital y proceso urbano 24

Las condiciones generales de la producción
y los medios de consumo colectivo (MCC) 27

Elementos para la caracterización de la ciudad capitalista ... 29

Los medios de consumo colectivo
y lo específicamente urbano en el capitalismo 30

El valor de uso de la ciudad 32

El capital que no se valoriza 34

La inversión en medios de consumo colectivo 37

Los límites de la producción de MCC 38

Estado y proceso de urbanización 39

Finalmente: una aproximación a la urbanización y al ordenamiento territorial bajo el neoliberalismo	40
Fuentes consultadas	44
LA METRÓPOLIS Y LA CRISIS DEL PROYECTO NEOLIBERAL EN AMÉRICA LATINA: ¿QUÉ PAPEL? ¿QUÉ CAMINOS?	
<i>Luis César de Queiroz Ribeiro</i>	45
Introducción	45
La ciudad en el capitalismo dependiente	52
La ciudad del capitalismo histórico en América Latina	58
Metropolización en América Latina como semiperiferia del sistema mundial	65
Conclusiones	67
Fuentes consultadas	72
CONFLICTOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICA URBANA EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, 1980-2014	
<i>Emilio Pradilla Cobos</i>	
<i>Felipe de Jesús Moreno Galván</i>	75
Introducción	75
Impacto de los cambios económicos neoliberales en las organizaciones sociales de la ZMVM	82
Cambios morfológicos y movimientos sociales	88
Alcances y límites de las movilizaciones en la terciarización .	92
A manera de conclusión: cambios estructurales y nuevos movimientos sociales	99
Fuentes consultadas	101
TERCIARIZACIÓN ECONÓMICA: DESIGUALDADES EN LAS ZONAS METROPOLITANAS EN EL CENTRO DEL PAÍS	
<i>Celia Hernández Cortés</i>	103
Introducción	103
Tercerización de la economía: campo de debate teórico	103
Las ciudades y las actividades terciarias	110
Capitalismo y neoliberalismo: urbanización y tercerización	113

Terciarización en México:

las zonas metropolitanas del centro del país	115
Consideraciones finales	125
Fuentes consultadas	127

PROCESO DE METROPOLIZACIÓN:

ZMPT. CONSECUENCIAS PERVERSAS, MUNICIPIOS AGRÍCOLAS

Virginia Cabrera Becerra

<i>Lilia Varinia C. López Vargas</i>	129
--	-----

Introducción	129
--------------------	-----

Las áreas metropolitanas, estructuras
socioespaciales complejas.

Nodo de formas urbanas, bondades y perversiones	131
---	-----

Metropolización en el contexto nacional	135
---	-----

Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala:

la marca indeleble de los procesos históricos	139
---	-----

Antesala del proceso de metropolización, 1960-1980	140
--	-----

El nacimiento largamente anunciado:

metropolización Puebla-Tlaxcala	146
---------------------------------------	-----

Metropolización acelerada,

montada sobre despojos de suelo. Etapa 1993-2012	148
--	-----

¿Megalópolis en ciernes? Etapa 2012-2014	152
--	-----

Para cerrar	155
-------------------	-----

Fuentes consultadas	157
---------------------------	-----

LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS METROPOLITANAS.

EL CASO DE LA ZONA METROPOLITANA-PUEBLA TLAXCALA

*Isabel Castillo Ramos**Octavio Flores Hidalgo**Adelina Espejel Rodríguez*

<i>José de Jesús Sesín Marín</i>	159
--	-----

Introducción	159
--------------------	-----

El fenómeno metropolitano	160
---------------------------------	-----

El Fondo Metropolitano, los consejos para

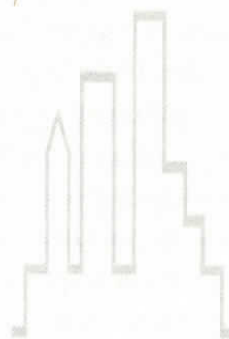
el desarrollo metropolitano y los comités técnicos	163
--	-----

La gestión para el desarrollo de las metrópolis	166
---	-----

Planeación del desarrollo	
de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala	167
La gestión y planeación en la ZMPT.....	170
Conclusiones	178
Fuentes consultadas	181

Conflictos, movimientos sociales y política urbana en la Zona Metropolitana del Valle de México, 1980-2014

*Emilio Pradilla Cobos**
*Felipe de Jesús Moreno Galván***



INTRODUCCIÓN

El significativo crecimiento demográfico de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en los años sesenta y setenta¹ provocó una importante carencia de suelo, vivienda y servicios básicos; este proceso se combinó con una limitada política gubernamental de dotación de vivienda popular. Dicha situación obligó a miles de habitantes a organizarse en movimientos urbanos populares (MUP) que se enfocaron a reivindicar sus demandas ante el gobierno y sus instancias de planeación urbana y desarrollo social. Tales movimientos fueron constituidos por personas de bajos ingresos con una ideología política de oposición al régimen social y político, de defensa de los asentamientos irregulares y de exigencia de programas de suelo y vivienda popular.

A mediados de los ochenta, el desarrollo de los movimientos populares se situaba fundamentalmente en las periferias de la metrópoli; pero el sismo de 1985, que afectó la zona barrial antigua del centro de la ciudad, propició el surgimiento de organizaciones de damnificados y posteriormente de solicitantes de vivienda, como la Asamblea de Barrios, la

*Doctor en Urbanismo. Profesor-investigador del Departamento de Teoría y Análisis, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México, D.F. Investigador Nacional, Sistema Nacional de Investigadores, Conacyt. Miembro de la Red Nacional de Investigación Urbana de México, la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio y la Red Latinoamericana de investigadores sobre Teoría Urbana.

**Doctor en Ciencias y Artes para el Diseño, Investigador de Cátedras Conacyt en el Instituto Tecnológico de Cancún, Quintana Roo.

¹En los años sesenta y setenta la tasa media de crecimiento anual de la población de la ZMVM fue de 5.23 y 3.55 por ciento respectivamente, la cual paso de 5'461,675 habitantes en 1960 a 12'895,607 en 1980 (INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda).

Unión Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT) y la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre (UVYD), que después del proceso de reconstrucción fomentaron la creación de nuevas organizaciones de demandantes de vivienda en diferentes puntos de la zona metropolitana, influyendo en procesos políticos electorales, así como en políticas y proyectos urbanos. Estos movimientos de pobladores de bajos recursos, orientados a la reivindicación de problemáticas básicas en torno a la vivienda, constituyeron un referente que caracterizó a los principales movimientos urbanos hasta la década de los noventa; sin embargo, durante esta década, los MUP perdieron progresivamente su importancia debido a tres procesos principales:

- a) Desde las elecciones presidenciales de 1988, diversos líderes del MUP participaron en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, posteriormente, entre 1990 y 1991, en la creación del Partido del Trabajo (PT); a lo largo de la década siguiente, la mayor parte de los líderes de los movimientos se vincularon con los gobiernos locales y con los partidos políticos de oposición. Esta situación derivó en mecanismos clientelares de relación y en la supeditación de las dirigencias del MUP a los intereses partidarios, lo que limitó la capacidad de acción y, sobre todo, el desarrollo democrático de las organizaciones.
- b) Los gobiernos establecieron programas asistencialistas que crearon clientela electoral para el partido en el poder,² lo que fragmentó a la izquierda (Haber, 2009). Por ejemplo, por medio del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) se regularizó una invasión a gran escala en zonas ejidales en los municipios conurbanos de Chalco³ y Chimalhuacán, lo que sirvió para reducir la presión que generaban los solicitantes de vivienda más pobres allí asentados.
- c) Los gobiernos neoliberales limitaron las atribuciones y la capacidad financiera de las principales instituciones que ofrecían créditos y

²El partido hegemónico en México en el siglo xx fue, con distintos nombres, el Partido Revolucionario Institucional.

³El municipio de Chalco tenía 282,940 habitantes en 1990; fue subdividido en el municipio de Chalco y el de Valle de Chalco Solidaridad, que en 2010 contaban con 310,130 y 357,645 habitantes, respectivamente.

vivienda a los grupos del MUP, principalmente el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). En los años noventa, los organismos públicos federales de vivienda fueron transformados en instancias de financiamiento; la producción de vivienda de interés social se dejó en manos de las empresas constructoras privadas, que ofrecieron vivienda accesible aunque de pésima calidad, ubicada en su mayoría en los más alejados municipios del Estado de México conurbados en la ZMVM. Por ejemplo, entre 2005 y 2010, se autorizaron 147 conjuntos urbanos con un total de 270 mil viviendas (GEM, 2010); el esquema de otorgamiento de créditos para acceder a estas viviendas fue individual, lo que también desalentó la organización colectiva.

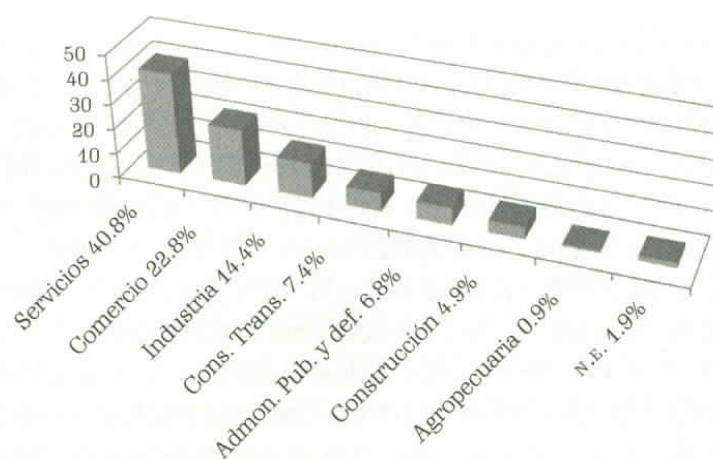
Si bien los MUP perdieron influencia de manera progresiva, esto no significó su desaparición ni la disminución de los conflictos socio-territoriales en la ZMVM, ya que los impactos de los cambios económicos y territoriales propiciaron el surgimiento de diferentes tipos de conflicto. Como muestra: en 1997 se registró un total de 2,790 movilizaciones en el Distrito Federal; en 2006 hubo 2,332; en 2007, 2,932; en 2009, 3,268; para 2011 se llegó a las 5,935; en 2012 hubo 7,319 y para 2013 se presentaron 7,910 acciones colectivas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Estos datos muestran una tendencia sostenida al incremento, que no se relaciona con una evolución de los movimientos sociales preexistentes sino con el surgimiento de un conjunto nuevo de conflictos vinculados a los procesos económicos, sociales, políticos y territoriales de este periodo.

Uno de los elementos determinantes del cambio socioeconómico y territorial fue la incorporación de México a la economía internacional de libre mercado mediante la aplicación de políticas neoliberales, adoptadas por los gobiernos federales desde la década de los ochenta, y su consiguiente impacto en la desindustrialización de la ZMVM, lo que implicó que la metrópoli experimentara durante la década de los ochenta y, sobre todo, a partir de la década de los noventa una transformación paulatina en su base económica, pasando de una economía predominantemente industrial a una comercial y de servicios (Pradilla *et al.*, 2012). En números generales, entre 1980 y 2014 el sector terciario aumentó su participación en el PIB del Distrito Federal, de 66.66 al 82.38 por ciento. El impacto socioeco-

nómico de la desindustrialización se manifestó en la pérdida de empleos⁴ y en el aumento de la desigualdad social, lo que obligó a miles de desempleados a buscar trabajo en actividades terciarias; sin embargo, en el empleo terciario se observaron claras tendencias a la polarización entre las actividades formales y las informales, y estas últimas se hicieron mayoritarias. En las estadísticas oficiales, los “empleos” informales terciarios se integran en las categorías de: *servicios comunales, sociales y personales* y en menor medida en las de *servicios de transporte, almacenaje y comunicaciones*.⁵

Gráfica 1

DISTRIBUCIÓN DE LA PEA ACTIVA EN LA ZMVM, 2007

Fuente: INEGI (2007); Setravi (2010b).⁶

El proceso de terciarización es más marcado en el Distrito Federal que en el Estado de México, en donde hay mayor presencia industrial y

⁴De acuerdo con los datos de INEGI, en 2009, en medio de la recesión económica, la tasa de desempleo abierto alcanzó 5.5 por ciento a nivel nacional, 6.9 por ciento en el Distrito Federal y 7 por ciento en el Estado de México, su mayor nivel desde 1995, cuando en medio de otra recesión había llegado, respectivamente, a 6.2, 7.1 y 5.1 por ciento de la población económicamente activa (PEA).

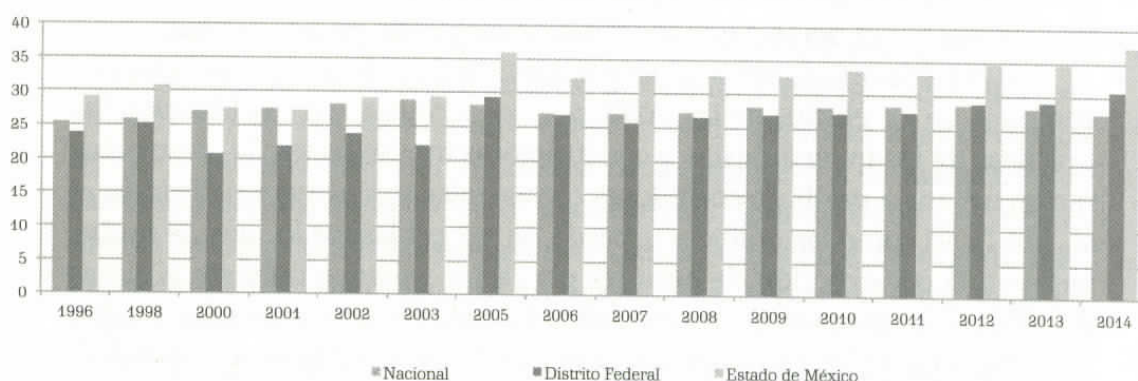
⁵En el Sistema de Cuentas Nacionales, la población considerada para generar el PIB es mayor a la de los trabajadores del sector formal de la economía, por lo que incluye también a los trabajadores informales.

⁶El área de estudio del INEGI, 2007 comprende las 16 delegaciones del Distrito Federal, así como 40 municipios del Estado de México que forman parte de la ZMVM.

del sector agropecuario, como lo indica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, en la cual la población ocupada por sector de actividad económica en el Distrito Federal correspondía a 0.50 por ciento ocupada en actividades primarias, 16.58 por ciento en secundarias y 82.38 por ciento en terciarias, mientras que se registró 0.54 por ciento en actividades no especificadas; en contraste, para el mismo periodo en el Estado de México se contaba con 4.68 por ciento en actividades primarias, 26.8 por ciento en secundarias y 68.15 por ciento en el sector terciario, con 0.37 por ciento de la población ocupada no especificado.

Gráfica 2

TASA DE OCUPACIÓN EN EL SECTOR INFORMAL
NACIONAL, DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE MÉXICO



Nota: El modelo de encuesta al que corresponde la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) dejó de operar en campo en diciembre de 2004. A partir de enero de 2005 se aplica un nuevo modelo denominado Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), mismo que comprende un nuevo diseño de cuestionario, la introducción de nuevos clasificados, así como técnicas innovadoras de procesamiento y supervisión. Adicionalmente, la ENOE cuenta con la estimación actualizada de la población total, con base en la Conciliación Demográfica realizada por el CONAPO, el INEGI y el COLMEX.

Los resultados de los años anteriores se obtienen de aplicar criterios ENOE en la construcción del indicador a las bases de datos de su encuesta antecesora (ENE) completando la brecha población (total, hombres y mujeres) remanente con un factor de ajuste según la cobertura y tipo de población.

Las cifras se refieren a la población de 14 años y más.

Las variaciones corresponden a diferencias expresadas en puntos porcentuales.

Serie desestacionalizada y tendencia-ciclo calculada por métodos econométricos a partir de la ENOE.

Fuente: De 2000 a 2011, INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos, y de 1994 a 1999, Encuesta Nacional de Empleo (ENE). De 2012 al 2014, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI.

Debido a las crisis económicas y desempleo correlativo, miles de personas se vieron obligadas a trabajar en la informalidad, como indica la gráfica 2, en la cual se observa que la informalidad en un periodo de estabilidad económica (2000-2003) fue más baja en el Distrito Federal y el

Estado de México que en el resto del país; sin embargo, también se aprecia que estas entidades reaccionaron de manera más intensa al periodo de crisis a partir de 2005, especialmente el Estado de México; en años posteriores se observa que el Distrito Federal se encuentra cerca de la media nacional; pero al iniciar otro recrudecimiento de la crisis en 2013 y 2014, la informalidad vuelve a aumentar de manera importante sobre la media nacional, especialmente en el Estado de México.

Entre las diversas modalidades de ocupación informal, cabe destacar el comercio y los transportes, ya que la necesidad de organizarse para conservar el uso de espacios públicos con potencial comercial, o para obtener concesiones en el transporte, generó movimientos híbridos urbanos-gremiales. Debido a sus características territoriales y reivindicativas, estas nuevas organizaciones surgidas en gremios no regulados se relacionaron frecuentemente con las organizaciones del MUP que continuaron operando en este periodo.

Las transformaciones socioespaciales, derivadas de la combinación compleja de los efectos de las políticas macroeconómicas neoliberales, las prácticas de los inversionistas y constructoras inmobiliarias, la reestructuración urbana a partir de corredores comerciales y de servicios (Pradilla *et al.*, 2012), así como las políticas urbanas de los gobiernos locales, se tradujeron en la construcción de grandes proyectos urbanos públicos y privados, los cuales generaron otra modalidad de movimientos sociales, ya que en la mayoría de los casos los habitantes de las zonas donde se construyeron (o se construyen hoy) estos proyectos, se opusieron a los impactos que causaron. Un componente importante de estos procesos conflictivos ha sido la política urbana gubernamental, pues los gobiernos federales y locales promovieron políticas de tipo neoliberal porque:

- Abandonaron la planeación y la gestión del desarrollo urbano, y fomentaron las inversiones inmobiliarias privadas y la construcción de grandes proyectos en zonas urbanas y rurales, sin considerar los impactos sociales y ambientales.
- Desarrollaron grandes proyectos de vialidad para automóviles, concesionando su construcción y explotación⁷ a empresas privadas, y subordinaron el transporte público al privado.

⁷Específicamente mediante el esquema de vialidades confinadas de cuota.

- Transfirieron funciones del gobierno al sector privado, por ejemplo: trasladaron todas las etapas de la construcción de vivienda de interés social a las empresas constructoras privadas, conservando sólo la dotación de créditos por parte de algunas instancias de gobierno; y se permitió y fomentó la entrada de empresas privadas a la administración de servicios como el transporte.
- Favorecieron el control privado de espacios públicos tales como la concesión de áreas y vías públicas. Además, ante la carencia de reservas territoriales, se promovió la transformación del uso de suelo de áreas libres remanentes, como tiraderos de basura e instalaciones recreativas, y la invasión y consiguiente urbanización del suelo de conservación ecológica.

La mayoría de los territorios en proceso de transformación han sido zonas en donde las infraestructuras, densidades, intensidades de construcción y usos del suelo establecidos no correspondían a las necesidades de los desarrolladores inmobiliarios, lo que llevó a su modificación, causando un alto impacto social y ambiental. Cuando estos procesos se dieron en zonas pobladas por grupos sociales que pudieron organizarse, hubo conflictos que obligaron en ocasiones a detener o replantear los nuevos proyectos.

Para contribuir al análisis estructural de estos procesos complejos, se plantea el estudio de las características generales de los conflictos urbanos contemporáneos, con tres apartados principales:

1. Los impactos sociales de los cambios económicos neoliberales en la ZMVM, específicamente en el empleo informal.
2. Los objetivos y formas de organización de los movimientos urbanos en relación con los cambios metropolitanos generados por los grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura públicos y privados.
3. La situación, alcances y límites de la participación ciudadana y de los movimientos sociales en la gestión del desarrollo metropolitano, y en la generación de un proyecto urbano de largo plazo.

IMPACTO DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS NEOLIBERALES
EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ZMVM

Desde la década de los noventa, los cambios económicos y morfológicos producidos por la reestructuración terciaria de la ZMVM, las políticas públicas de los nuevos gobiernos y las transformaciones sociales influyeron en la conformación de movimientos sociales distintos a los MUP de las décadas anteriores. La pérdida de empleos representó un factor importante en la conformación de nuevos colectivos organizados, ya que miles de desempleados se ocuparon en actividades que son más lucrativas en la informalidad, como el comercio callejero, los servicios personales y los transportes; sin embargo, hay que señalar que una parte de vendedores en la vía pública y de transportistas irregulares no forma parte de los sectores más desprotegidos de la sociedad, sino de un sector que encontró una ocupación redituable en el sector informal.⁸ La defensa ante la regularización y la aplicación de impuestos, la competencia de otros grupos, la defensa territorial y la obtención de concesiones propició la conformación de organizaciones urbano-gremiales.

En el caso de los comerciantes informales se observa un crecimiento sostenido de su número, pasando de 17 a 95 mil personas entre 1980 y 1990 (Álvarez, 2005: 79); en 1997 existían 98,379 ambulantes (DDF, 1997); en 2003 eran 199,328 (INEGI, 2004); y para 2005 la cifra llegó a 201,570 personas (CESOP, 2005). En un conteo similar, de acuerdo con una estimación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, el número de vendedores ambulantes en el Distrito Federal en 1994 era de 180 mil, en 1998 de 250 mil, en 2000 habría 299 mil y para 2012 llegarían a ser más de 660 mil; y 45 mil de éstos estarían situados en el Centro Histórico.⁹

Dichos vendedores distribuyen principalmente piratería digital, ropa y dispositivos electrónicos de contrabando, robados o importados ilegalmente, proporcionados por productores piratas y traficantes en

⁸La encuesta "Representaciones sociales del ambulante en el DF", realizada por la UNAM, encontró que 48 por ciento de los informales estudiaron al menos bachillerato o estudios superiores, y 15 por ciento tiene sólo la primaria.

⁹La notoria diferencia entre las cifras se explicaría por el interés de los comerciantes formales de la Canaco de mostrar una situación muy grave para sus agremiados.

gran escala,¹⁰ lo que propició que las organizaciones de vendedores estuvieran determinadas por relaciones comerciales jerárquicas corruptas y por liderazgos claramente no democráticos. Cabe mencionar que un porcentaje importante de los vendedores ambulantes son en realidad empleados al servicio de grandes comerciantes, son explotados con bajos salarios, malas condiciones de trabajo y sin seguridad social; por lo general forman parte de grupos vulnerables, como mujeres, niños¹¹ y ancianos.

Históricamente, la zona principal de comercialización para los sectores populares se ubicaba en las calles del Centro Histórico, el mismo lugar de surgimiento de diversas organizaciones del MUP, antes y después del sismo de 1985; esta situación territorial coincidente favoreció que las organizaciones de vendedores se vincularan a las organizaciones populares y adoptaran algunos de sus esquemas organizativos, como la vinculación corporativa y clientelar con partidos políticos; este esquema estuvo influido además por la herencia corporativista del Partido Revolucionario Institucional, iniciada en los años cuarenta, cuando las primeras organizaciones de comerciantes del barrio de Tepito —la Fraternal, la Revolucionaria y la de no asalariados—, fueron incorporadas al sector popular del PRI; en 1990, las 29 organizaciones de comerciantes de Tepito se encontraban afiliadas al PRI a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) (Castro, 1990: 63). En 1993 se efectuó una gran reubicación de 9,600 ambulantes del Centro Histórico en diversas plazas comerciales construidas para tal efecto, pero por su mala ubicación fracasaron, convirtiéndose en el mejor de los casos en bodegas.

En el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, del Partido de la Revolución Democrática (2006-2012), la atención por parte del gobierno local se dio también de manera superficial, pero con mayor intervención de la vigilancia policial: por ejemplo, 25 mil vendedores agrupa-

¹⁰El origen de los productos introducidos de contrabando, conocidos popularmente como *fayuca* fue originalmente Estados Unidos, pero en fechas más recientes lo es China.

¹¹En un estudio sobre el trabajo infantil ambulante en las capitales latinoamericanas, que incluyó a la Ciudad de México, se encontró que 31.6 por ciento de los niños se dedicaban al comercio ambulante; 14.9 por ciento a pedir limosna; 14.5 por ciento, a acompañar a algún adulto; 12.6 por ciento a limpiar; 10.3 por ciento, a actuar; 5.4 por ciento a cuidar carros, y 11 por ciento a otras actividades, entre las que se encontraron lustrar zapatos, abrir puertas de los carros, llevar paquetes, prostituirse y dirigir tráfico vehicular (Pinzón *et al.*, 2006: 365-366).

dos en unas 100 organizaciones fueron retirados en 2007 del “perímetro A” del Centro Histórico, por medio de acuerdos con los líderes, y reubicados en plazas comerciales, mediante la implementación de operativos de vigilancia policial (Silva, 2010: 218). No se dieron alternativas de empleo ni se atacó la estructura de la comercialización de los productos ilegales; sólo se usó la fuerza pública, la cual se incrementó, entre 2007 y 2011, de 100 a 500 efectivos destinados a vigilar que no se ejerciera el comercio ambulante en el centro; como resultado, en el mismo periodo 54,700 ambulantes fueron arrestados y remitidos ante el juez cívico.

Los resultados de esas acciones fueron contraproducentes, ya que los vendedores emigraron a otras zonas, se mantuvo la comercialización irregular en los tradicionales barrios de Tepito y La Lagunilla en la zona del Centro Histórico, se enfrentaron constantemente los intentos de regreso de los llamados “toreros”¹² y los tianguis¹³ crecieron a lo largo de la ciudad junto con una multitud de puntos irregulares de venta de comida y productos en las calles principales de los barrios y colonias (sobre todo en las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc e Iztapalapa), en los accesos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en escuelas y en diversos hospitales.¹⁴ Por ello de un centro principal de ambulante surgieron múltiples agrupaciones de comerciantes, sobre todo en las zonas populares. También se incrementó el comercio callejero semifijo en las cercanías de las estaciones del transporte público y el comercio ambulante a bordo de las unidades de transporte.

El discurso con el que los comerciantes semifijos han justificado su presencia involucra la importancia de acciones de resistencia; al permanecer en los espacios públicos durante años, se genera una especie de tradición o *uso y costumbre*; también mencionan recurrentemente el derecho al trabajo. Un elemento mencionado con frecuencia es el puntual pago de cuotas a los líderes y a las oficinas de gobierno, con lo que certifican su derecho de piso (Silva, 2007: 56) y su pertenencia a una organización, por lo que se observa un nivel muy básico en la discusión sobre

¹²Vendedores callejeros móviles, que “torean” a la policía encargada de su control.

¹³Mercados populares callejeros.

¹⁴En 2010, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) presumía haber “limpiado” de vendedores ambulantes 464 accesos de 164 estaciones del metro, 122 calles del Centro Histórico, 74 hospitales o clínicas y tres centros de transferencia modal o Cetrans (Ávila, 2010).

el uso del espacio público, limitando el problema a la falta de trabajo y a su defensa de los procesos clientelares. Así, al estudiar una organización de ambulantes en la Alameda central, Jaramillo (2007) encontró un esquema que podría considerarse típico de relaciones clientelares, descritas como el compromiso de votos, asistencia a eventos partidistas como “acarreados” y la entrega de recursos materiales a favor de un partido, a cambio del cumplimiento de pactos de protección, concesiones y la preferencia en el disfrute de programas sociales gubernamentales.

Las organizaciones de vendedores que funcionaron con el esquema corporativo durante las *regencias*¹⁵ del periodo hegemónico, del PRI, enfrentaron un cambio de reglas con la llegada al gobierno capitalino del PRD en 1997, ya que en 1998 se promulgó una regla según la cual podía registrarse una asociación civil con tan sólo 10 personas; el objetivo de esta estrategia fue fragmentar los grandes monopolios de organizaciones dirigidas por líderes asociados al PRI, con lo que hubo una explosión de liderazgos y una gran fragmentación de las organizaciones de vendedores que recibieron además beneficios asistenciales para vincularse con el PRD (Zaremborg, 2010: 154). El periodo intermedio (1998-2005) funcionó como un cambio de partidos en el control, para terminar operando dentro de una estructura clientelar asociada al PRD. A partir de 2005, el esquema cambió nuevamente, pues las organizaciones que se habían fragmentado iniciaron una nueva tendencia hacia la monopolización que buscó el amparo de los grandes líderes ante la política de expulsión de la zona centro y la amenaza del desalojo (Zaremborg, 2010: 173); en este escenario y ante la recuperación de espacios políticos de importancia por parte del PRI, incluida la presidencia de la República, algunos líderes regresaron a su militancia original.

En el rubro de las organizaciones vinculadas al transporte, desde 1981 el principal proveedor del servicio de transporte de pasajeros en el Distrito Federal fue la paraestatal Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (AUPR-100) que con tarifas subsidiadas llegó a cubrir 7,100 kilómetros de servicio (Legorreta, 2004); el sindicato de la empresa (SUTAU-100), vinculado al Movimiento Proletario Independiente, una organización urbano-popular, llegó a contar con cerca de 20 mil trabajadores.

¹⁵Gobiernos del Distrito Federal antes de 1997, designados por el presidente de la República; luego se llamaron jefes de gobierno, elegidos democráticamente.

En 1989, el SUTAU-100 inició una huelga solicitando 100 por ciento de aumento salarial; el gobierno declaró la quiebra de la empresa y en 1995 disolvió AUPR-100, reemplazándola por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); esta nueva empresa no cubrió más que una parte del servicio que anteriormente ofrecía AUPR-100: 3,220 kilómetros de red de rutas (SETRAVI, 2009).

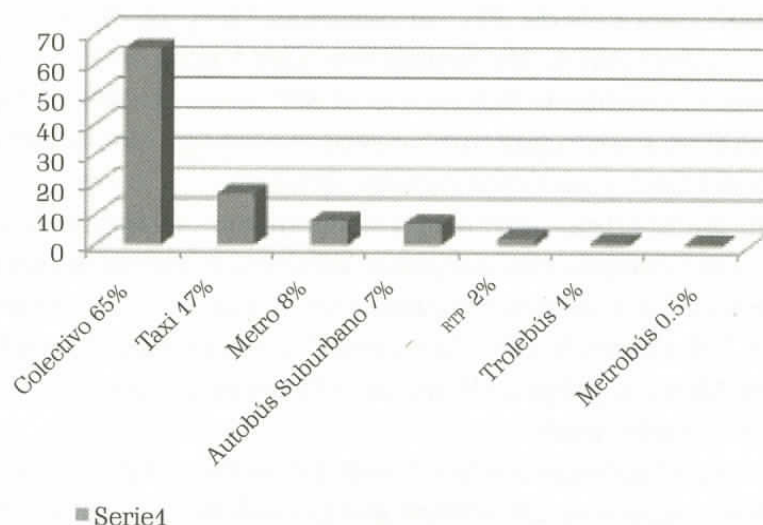
Las organizaciones del transporte público concesionado a actores privados que reemplazaron a AUPR-100 iniciaron actividades de forma ilegal y al amparo del corporativismo político con vehículos modelo "combi" que se expandieron hacia zonas de asentamientos ilegales; a mediados de los años ochenta se introdujeron microbuses, y a partir del 2000 se empezaron a usar autobuses en los ramales más rentables (Legorreta, 2004). Con la introducción de nuevos modelos, no se desecharon los vehículos usados sino que se desplazaron para dar servicio en la periferia. Según Legorreta, los concesionarios transportaron entre 31 y 65 por ciento de los viajeros entre 1986 y 1995 (Legorreta, 2004), en tanto que para Rodríguez y Navarro, los concesionarios de unidades de baja capacidad realizaron 49 por ciento de los traslados en el periodo de la *regencia* de Camacho Solís (1988-1993) y 75 por ciento durante la administración de Espinosa Villarreal (1994-1997) (Rodríguez y Navarro, 1999); en el año 2007, de acuerdo con la Encuesta de Origen y Destino, el servicio concesionado de transporte colectivo transportaba 46.2 por ciento de los viajes de la metrópoli y hasta 65 por ciento si se toma en cuenta sólo el transporte público (INEGI, 2007).

Hacia 1990, el transporte daba trabajo a 191 mil personas (Álvarez, 2005: 79) y su demanda había crecido junto con la zona metropolitana; en 2007 existían 106 organizaciones de transportistas, de las cuales nueve eran empresas y el resto asociaciones civiles con un total de 30,170 unidades, de las que 20 mil eran microbuses (GDF, 2010a).¹⁶ Para 2011, el Estado de México contaba con 343 sociedades mercantiles con alrededor de 125,481 concesiones (Puente, 2011); de éstas, 75 mil estaban destinadas al transporte colectivo y el resto eran de arrendamiento como taxis, de acuerdo con el Instituto del Transporte del Gobierno del Estado de México (ITEM).

¹⁶Cerca de 80 por ciento de los vehículos se encuentran fuera de norma y han cumplido más de 10 años, plazo que constituye el límite de su vida útil autorizada (SETRAVI, 2010b).

Gráfica 3

VIAJES POR MODO DE TRANSPORTE EN LA ZMVM, 2007



Fuente: INEGI (2007).

En general, la calidad del servicio es menor en el Estado de México que en el Distrito Federal debido a la existencia de problemas como un parque vehicular obsoleto y la existencia de vehículos no diseñados para el transporte de pasajeros (miles de camiones de carga de mercancía fueron “aconicionados” para transporte de pasajeros); adicionalmente, la baja intensidad de transporte de las localidades más alejadas implica la inexistencia de transportes colectivos periódicos y la necesidad de contratar taxis; también la autorización de cientos de concesiones, sin un estudio de demanda de servicio y líneas existentes, ha provocado la superposición de recorridos, lo que genera la competencia constante de los transportistas por el pasaje.

En la privatización del transporte, el incremento del uso del taxi es relevante, ya que creció 119.7 por ciento entre 1994 y 2007 (Connolly, 2009: 16), y su número no ha parado de aumentar; en 2008 se contabilizaban 108,041 unidades registradas/concesionarios en el Distrito Federal y para julio de 2014 se estimaba un patrón de 148,602 taxis en total (SETRAVI, 2010b y GDF, 2014), además de un número no precisado de vehículos sin registro que realizaban esta función de manera irregular (en 2002 se estimaban en cerca de 20 mil los taxis irregulares en el Distrito Federal) y 91,482 taxis en 2009 en todo el Estado de México (GEM, 2010).

El servicio de taxi movilizaba cotidianamente más de 1'250,000 pasajeros en 2010 y constituye actualmente un relevante nicho de empleo en la metrópoli para más de 300 mil personas. Un problema es que para el mismo 2010, del total de las concesiones alrededor de 70 mil habían vencido su vigencia, aproximadamente 64,807 tenían problemas de titularidad y 16,200 no habían pagado la revista vehicular y/o no habían pasado la inspección físico-mecánica (SETRAVI, 2010b).

La dificultad administrativa para obtener una concesión y los trámites de revista fomentó que surgieran diversas organizaciones de taxistas sin permiso que se unieron a organizaciones del MUP: así, el Frente Popular Francisco Villa apoyó a los "panteras" y en procesos similares en el Estado de México, grupos de transportistas se aliaron con la organización Antorcha Campesina.

En suma, el servicio de transporte en la ZMVM ha sido dejado en su mayor parte en manos de operadores privados, los cuales han prestado un servicio ineficiente e inseguro debido a los vehículos inadecuados, a los operadores no calificados y al ingreso constante de nuevas unidades irregulares. En el aspecto político, las nuevas organizaciones de transportistas no tuvieron el protagonismo de AUPR-100, pero han enfrentado cualquier intento de regularlas o reemplazarlas con otros sistemas de transporte, exigiendo participación en las nuevas líneas modernas y reguladas de autobuses públicos en corredores y en carriles confinados (Metrobús y Mexibús).

El crecimiento sin precedente de las organizaciones de vendedores callejeros y transportistas irregulares ha generado la consolidación de grupos que se basan en su número y capacidad de movilización corporativa para obtener concesiones que les permitan seguir ejerciendo actividades básicamente irregulares; esta situación ha complicado la gestión urbana y su legitimidad, representando un problema en aumento.

CAMBIOS MORFOLÓGICOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES

A partir de la implantación del esquema neoliberal, los gobiernos tanto del Estado de México como del Distrito Federal fomentaron la construcción de grandes proyectos viales e inmobiliarios, que se han presentado

como sinónimo de inversión, empleos y modernización: centros comerciales, edificios corporativos y de vivienda de lujo, megaproyectos de vivienda popular (Pradilla *et al.*, 2012).

Con respecto a los proyectos inmobiliarios, desde finales de la década de los ochenta la ZMVM requirió espacios adecuados para alojar las funciones que demandaba la reestructuración económica, tales como oficinas o “edificios corporativos” para las empresas nacionales y sobre todo para las filiales de las compañías transnacionales y el conjunto de empresas que llevan a cabo las funciones de servicio para dichos corporativos (por ejemplo: contaduría, seguros, banca, publicidad, distribución, mantenimiento y seguridad) además de servicios comerciales y de recreación.

En este esquema de servicios, eran necesarias la concentración y la conectividad, pero las zonas preferidas (los corredores viales de Reforma e Insurgentes) carecían de espacios suficientes. Las tres *regencias* del periodo 1988-1997 promovieron abiertamente la inversión inmobiliaria extranjera y se establecieron diversos mecanismos para cooptar a los movimientos sociales y a las protestas ciudadanas que pudieran generar, especialmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994; así se promovieron: el programa de rescate del Centro Histórico, el proyecto Alameda y la zona de corporativos de Santa Fe.

Las zonas en donde se efectuaron las transformaciones más importantes fueron áreas tradicionalmente habitadas por sectores de ingresos medios y altos (excepto Santa Fe), en las que las infraestructuras, densidades y usos de suelo establecidos en los programas de desarrollo urbano entraron en conflicto con las nuevas edificaciones, por lo que tenían que ser modificados, representando también un alto impacto social para los habitantes; esta situación provocó múltiples conflictos y la organización de los vecinos para enfrentar los cambios de uso de suelo y la elevación de densidades e intensidades de construcción, así como para defender su calidad de vida. Para mediar con estos problemas desde el ámbito de la planeación urbana, se crearon las Zonas Especiales de Desarrollo Controlado (Zedec) y posteriormente los Programas Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU), en 1999, en los que se continuó con la gestión a escala local; sin embargo, funcionaron sólo como mecanismos de control social y ajustes normativos, en tanto se llevaban a cabo los proyectos inmobiliarios.

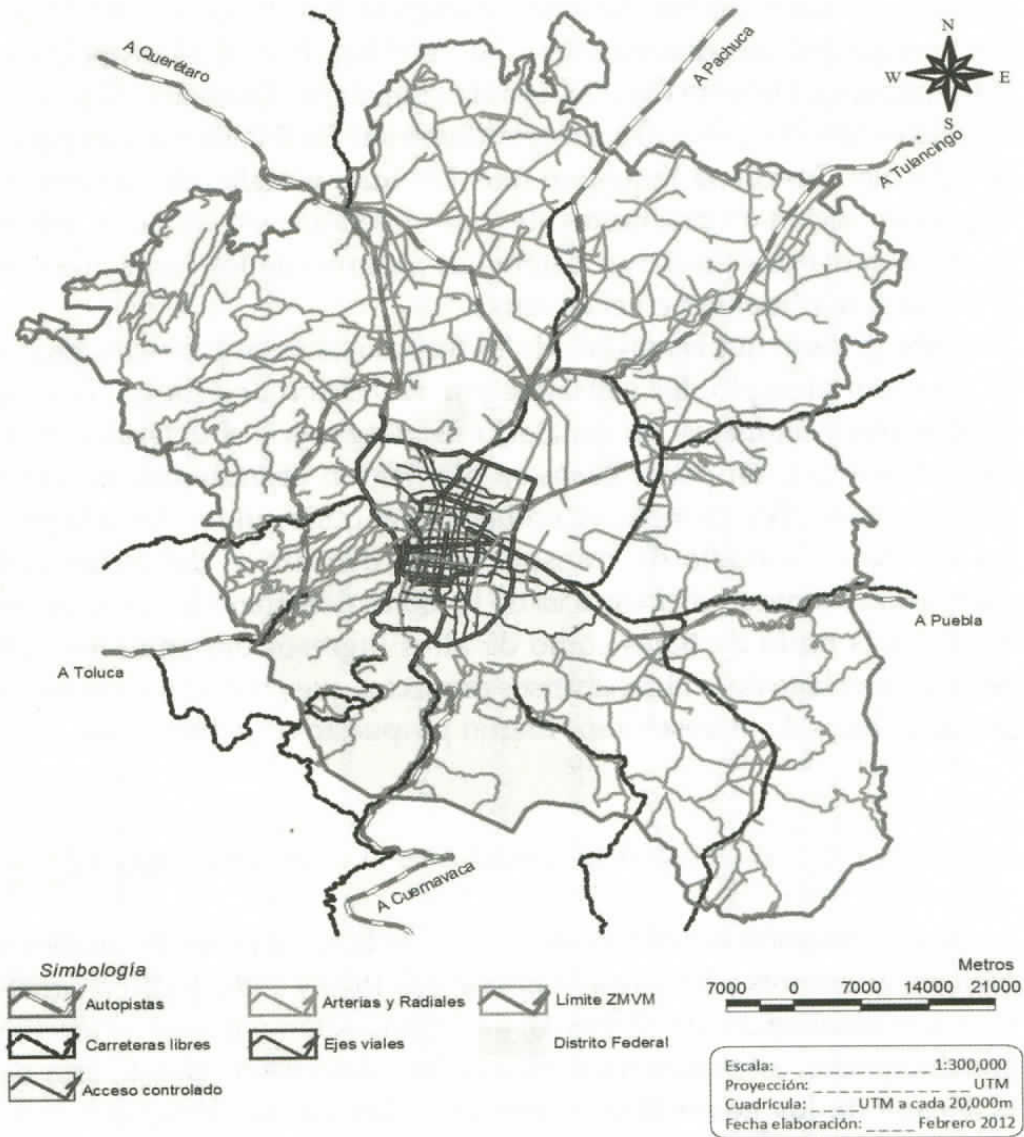
La incongruencia de las normatividades para encauzar los cambios de la terciarización quedó patente con la publicación en 2000 del “Bando 2”, una norma que tenía el objetivo de redensificar el centro de la Ciudad de México, promoviendo el repoblamiento en las cuatro delegaciones “centrales” de la ciudad: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Entre sus consecuencias estuvieron el encarecimiento del suelo, la consecuente expulsión de los sectores populares y la frecuente violación de los niveles de altura máximos permitidos. Estos procesos también provocaron afectaciones a los vecinos por daños a las viejas edificaciones, la carencia de agua y la sobresaturación de la infraestructura vial.

A pesar de los casos en los que la protesta pudo cancelar o modificar los proyectos, una aplastante mayoría de los desarrollos inmobiliarios, comerciales y de espectáculos se construyó, afectando la dotación de servicios y la calidad de vida de los vecinos que no tuvieron la capacidad organizativa ni de presión suficiente para oponerse efectivamente. Durante los conflictos, se careció de instituciones que mediaran de forma objetiva, con bases técnicas y con autoridad entre los intereses en conflicto, ya que el gobierno funcionó como promotor, por lo que los proyectos fueron impuestos en su mayor parte.

Cabe subrayar que los gobiernos continúan promoviendo las inversiones inmobiliarias. Entre 2007 y 2010, se apoyaron con incentivos fiscales 47 proyectos y se otorgaron 122 incentivos por más de mil millones de pesos; un destino importante de éstos fue el Corredor Reforma-Centro Histórico, donde desde 2007 se han otorgado apoyos para 33 proyectos (GDF, 2010b). De esta manera, se destaca que muchos de los conflictos han surgido no sólo por las obras, sino por la falta de control y la promoción de proyectos sin una planeación integral que tome en cuenta los impactos sociales y la opinión de los habitantes.

En la infraestructura vial, los proyectos se han caracterizado por aumentar progresivamente las escalas y su impacto metropolitano. Los más relevantes han sido los libramientos carreteros y las autopistas urbanas de cuota como: el Viaducto Elevado Bicentenario (22 kilómetros), la Autopista Naucalpan-Ecatepec (23 kilómetros), el Circuito Exterior Mexiquense (41 kilómetros), la Supervía Poniente (10 kilómetros), el Periférico Norte (10 kilómetros) y Sur (15 kilómetros).

Mapa I
VIALIDADES PRIMARIAS DE LA ZMVM, 2010



Fuente: Con base en datos tomados de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) (1999), Setravi (2010), Google (2011), Guía Roji (2010), Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de México (2010), y Secretaría de Desarrollo Metropolitanos (2010).

Elaboró: Maestra Laura Olivia Díaz Flores.

Fuente: Pradilla et al. (2012), *Zona Metropolitana del Valle de México: cambios demográficos, económicos y morfológicos*, UAM-X, inédito.

Además, entre el año 2000 y el 2011, se construyeron diversos puentes y distribuidores viales, destacando por sus dimensiones los distribuidores viales de San Antonio, Zaragoza, San Lázaro y calle 7-Av. Chimalhuacán, seis distribuidores sobre el Eje Troncal Metropolitano (Muyuguarda, Heberto Castillo, Ermita Iztapalapa, Taxqueña, Zaragoza, Oceanía y Texcoco), cuatro correspondientes al Eje 5 Poniente y el puente vehicular Castorena Yaqui-San José. Las nuevas vialidades generaron alguna oposición en prácticamente todos los casos; sin embargo, pocos de estos proyectos pudieron detenerse. Algunos de los conflictos más relevantes se presentan en el cuadro 1.

Cabe destacar que la mayoría de los reclamos ante los proyectos fueron locales, por ejemplo, los causados por el derribo de árboles, la falta de puentes peatonales, las instalaciones riesgosas y el deterioro de la imagen urbana; en pocos casos se plantearon argumentos de corte metropolitano, por ejemplo, el problema del tráfico inducido, o la propuesta de un modelo de transportación distinto al del automóvil particular. El contexto socioespacial de las obras determinó la movilización de sectores tanto de bajos como de altos ingresos dependiendo del ámbito inmediato de la obra; diversos proyectos que provocaron protestas de los sectores de ingresos altos fueron pospuestos o rediseñados.

ALCANCES Y LÍMITES DE LAS MOVILIZACIONES EN LA TERCIARIZACIÓN

La reestructuración económico-territorial de la ZMVM propició conflictos sociales diferentes a los presentados entre 1970 y 1990. Existen características ideológicas, de objetivos, de organización y de conformación que diferencian estos movimientos sociales urbanos surgidos a partir de la década de los noventa con respecto a los que se llevaron a cabo anteriormente.

Cuadro I

PROYECTOS VIALES EMBLEMÁTICOS QUE HAN GENERADO MOVILIZACIONES SOCIALES

<i>Año</i>	<i>Descripción del proyecto</i>	<i>Opositores</i>	<i>Resultado</i>
1996	Libramiento carretero La Venta-Colegio Militar (afectaría suelo de conservación ecológica).	Frente Coalocotla, pueblos afectados.	Cancelación del proyecto.
2002	Proyecto de segundo piso en un tramo del Anillo Periférico Sur.	Organización Fuerza Ciudadana y Vecinos.	Se realizó una consulta; no afectó al proyecto.
2007	Vialidad Hueyetlaco para conectar Huixquilucan y Cuajimalpa.	Vecinos de Bosques de las Lomas.	Cancelación del proyecto.
2008	Proyecto Integral Palmas (proyecto de “deprimidos” por una zona de altos ingresos).	Organizaciones vecinales.	Cancelación de parte del proyecto.
2009	Deprimido en la vialidad Ejército Nacional en su cruce con Ferrocarril de Cuernavaca.	Vecinos de Miguel Hidalgo.	Proyecto construido.
2009	Viaducto Bicentenario (proyecto de segundo piso en Periférico Norte afectando una escultura relevante).	Organizaciones vecinales.	Se modificó el proyecto para no afectar la imagen.
2010	Supervía Poniente (vialidad de cuota que afectó una colonia popular y un área de conservación).	Vecinos expropiados, especialistas.	Proyecto construido.
2011	Proyecto de contribuir una vialidad que cruzaría por fraccionamientos de Atizapán.	Vecinos de fraccionamientos.	Proyecto detenido.
2014	Proyecto de túnel bajo zonas arboladas de Chapultepec para el edificio Pedregal 24.	Vecinos de Miguel Hidalgo.	Proyecto detenido.
2014	Proyecto de construcción de la Autopista Urbana Oriente como carril confinado sobre camellones del Periférico Oriente.	Vecinos de colonias aledañas, académicos.	Proyecto detenido por otras causas.
2014	Remodelación y cambios de circulación en la Avenida Presidente Mazaryk.	Vecinos de Polanco.	Proyecto en construcción.
2015	Doble túnel de Circuito Interior-Río Mixcoac e Insurgentes para el que fue necesaria la tala de cientos de árboles.	Vecinos de las colonias aledañas.	Proyecto en construcción.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de *El Universal*, *La Jornada* y *Reforma*.

Ideología

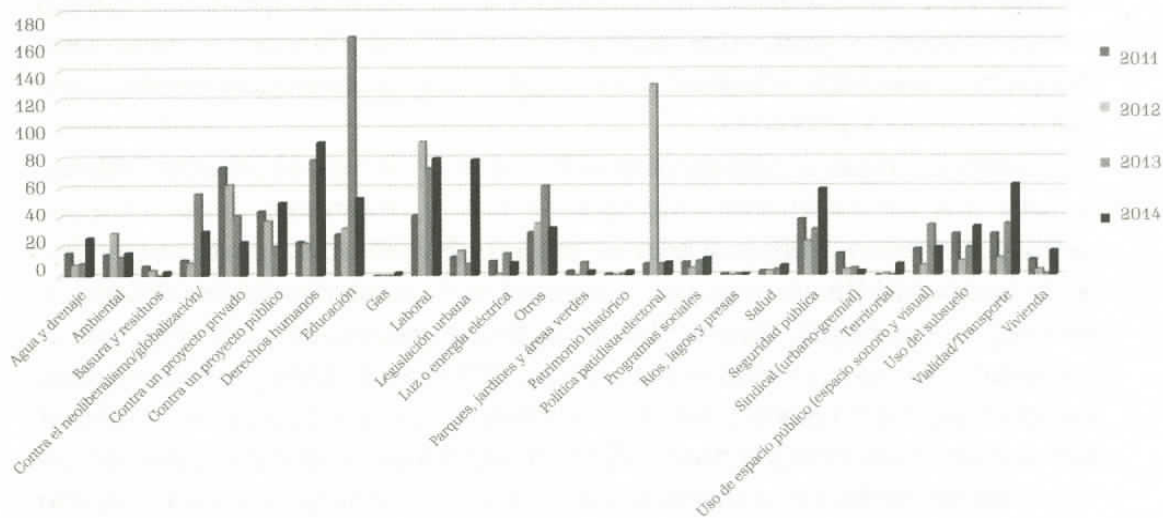
Las nuevas organizaciones sociales urbanas han mostrado una ideología muy rudimentaria si la comparamos con los discursos de las revoluciones proletarias que pregonaban algunas organizaciones del MUP de las décadas de los sesenta y setenta, como el maoísmo, el trotskismo y otros grandes proyectos transformadores de la sociedad. Las organizaciones sociales recientes muestran un manejo del discurso político enfocado en el ámbito local, apartado de los proyectos políticos de transformación, los proyectos urbanos globales y la planeación urbana; sin embargo, esto no significa que no sean influidos por grupos con intereses a mayor escala, como partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, como las ecologistas, de desarrollo urbano y de derechos humanos. Los casos de los vendedores ambulantes y de los transportistas son ilustrativos de las perspectivas pragmáticas que adoptan estos grupos, a los cuales no les interesa la filiación ideológica sino los beneficios que puedan obtener de las relaciones clientelares con los partidos políticos.

Objetivos

A diferencia de los MUP del pasado, las nuevas organizaciones vecinales o comunitarias no luchan por un cambio estructural, sino por la defensa de sus intereses inmediatos, laborales, patrimoniales y por un mejor posicionamiento ante los impactos que provocan las transformaciones económicas, territoriales y sociales.

De acuerdo con el seguimiento realizado en el Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM, durante cuatro años en los medios de comunicación, las demandas de tipo laboral son la primera causa de manifestación, lo que se explica en parte por la capacidad de organización y movilización de los sindicatos remanentes especialmente en el caso de los de trabajadores de la educación y de conflictos laborales como el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el reclamo de los trabajadores agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) (2009), y el de los empleados de la empresa Mexicana de Aviación (2010).

Gráfica 4
DEMANDAS DE LAS MOVILIZACIONES, 2011-2014



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM, UAM-X, IPPUR, UFRJ.

Asimismo, la preponderancia de las protestas en educación se encuentra vinculada al activismo estudiantil que participa no solo en demandas directamente vinculadas con la educación sino con procesos de democratización, apertura de los medios de comunicación y apoyo a demandas sociales puntuales, así como en la política electoral. Ejemplos de ello son los movimientos estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el movimiento interuniversitario "Yo soy 132", en el marco de las elecciones federales de 2012, y las protestas de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) contra los cambios neoliberales en su institución en 2014.

Destaca el rubro de los derechos humanos, ya que agrupa también un conjunto de demandas referidas no sólo al ámbito del derecho, sino también a necesidades básicas de seguridad, entendidas como derechos humanos. En el ámbito de los derechos humanos y la seguridad, fueron relevantes marchas locales contra la inseguridad (2004, 2008) y la "Marcha nacional por la paz con justicia y dignidad" (2011), promovidas por los medios de comunicación y las organizaciones civiles por la seguridad.

Las demandas contra proyectos privados ocupan el siguiente nivel de importancia; en este caso, cabe destacar que si se juntaran con las

protestas contra proyectos públicos, ocuparían por mucho el primer lugar en cuanto a causas de las movilizaciones; aquí se agrupan muchas de las protestas mencionadas con anterioridad, como las protestas contra megaproyectos y vialidades, además de movilizaciones por la protección del patrimonio histórico y las zonas arqueológicas o monumentales ante obras públicas y privadas.

Cabe distinguir los tipos de conflicto que se dan en el Distrito Federal, ya que por ser históricamente la sede de los poderes federales y concentrar el núcleo político y administrativo del país, una parte importante de las manifestaciones sociales ocurridas en su territorio son del orden federal; por ejemplo, demandas laborales, agrarias, de proyectos sociales, educación y vivienda rural. Así, en 2011 hubo 5,935 movilizaciones sociales, pero sólo 3,569 tuvieron un carácter local y 2,366 surgieron por demandas federales (Martínez, 2012), lo que implica que 39.86 por ciento del total de conflictos registrados en el Distrito Federal no respondieron a problemas del mismo.

Durante las tres últimas décadas, los conflictos urbanos locales han respondido regularmente a situaciones estructurales de necesidades básicas concretas insatisfechas, como trabajo, vivienda, servicios públicos, gestión urbana y oposición a proyectos inmobiliarios y viales, comercio ambulante, contra la administración local y por la impartición de justicia, constituyendo modalidades de demandas que se mantienen pese a los cambios en administraciones de gobierno, de políticas públicas y ciclos económicos, si bien también se presentaron conflictos coyunturales.

Así, se reconoce un "núcleo" de conflictos que se mantienen durante las tres décadas del periodo de análisis y que se encuentran vinculados a las necesidades sociales básicas, sin dejar de notar un grupo de conflictos que surgen de situaciones puntuales y que varían de un subperiodo a otro, pero que se desarrollan en el marco de la implantación de políticas neoliberales en la economía y el territorio de la ZMVM.

Organización

Los vínculos internos entre los miembros de los movimientos frecuentemente se formaron en organizaciones preexistentes, predominantemente

territoriales, como juntas ejidales, asociaciones de colonos o vecinos y organizaciones religiosas, por lo que el tejido social local es un elemento importante en su conformación. En general, las zonas que han ofrecido mayor resistencia y capacidad de respuesta a los proyectos de construcción públicos y privados son aquellas donde ha existido este tejido social consolidado.

En cuanto a las modalidades de expresión de la protesta y considerando exclusivamente las manifestaciones por objetivos locales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en las manifestaciones de 2011 participaron un total de 2'162,520 personas. Entre las modalidades de protesta se contaron 1,393 concentraciones, 447 bloqueos viales, 259 marchas, 152 mítines, 56 caravanas, 16 plantones, una toma de instalaciones y 42 manifestaciones como volanteos y abordajes en semáforos (Martínez, 2012). Con algunas variaciones, ésta ha sido una distribución típica de las modalidades de protesta en los últimos años, siendo preponderantes las concentraciones, bloqueos y marchas, lo que implica poca innovación en las formas de protesta, ya que se siguen empleando por parte de los movimientos sociales los medios de expresión tradicionales que se han usado durante más de un siglo.

En este sentido, un proceso innovador destacable es el uso por parte de nuevas organizaciones sociales,¹⁷ de plataformas de comunicación electrónica, ya sea de mensajes de texto o de las denominadas redes sociales en internet que se usan para distribuir información, discutir ideas y coordinar manifestaciones virtuales y físicas. El uso de estas tecnologías ha propiciado organizaciones de tipo horizontal, ya que se hace factible la discusión colectiva de las ideas, en lugar del liderazgo que caracterizaba a los movimientos anteriores. Sin embargo, estos tipos de organizaciones presentan debilidades estructurales entre las que destacan: la falta de vínculos estables más allá del compromiso individual; la dependencia de la publicidad del momento que los ubica y en desaparición rápidamente de los *trending topic* o temas del momento, y, por lo tanto, de la atención pública; y la imposibilidad de dialogar con otros colectivos y con miembros de la sociedad civil que no usan las redes sociales. Adicionalmente, la falta de liderazgo en la práctica genera con-

¹⁷Como el movimiento estudiantil #Yo soy 132, los Indignados Mexicanos, el grupo *Anonymous*, y las llamadas al "voto en blanco" en las elecciones de 2006.

flictos internos y la imposibilidad de negociar ante otros actores como representantes con la capacidad de aceptar acuerdos y asumir compromisos.

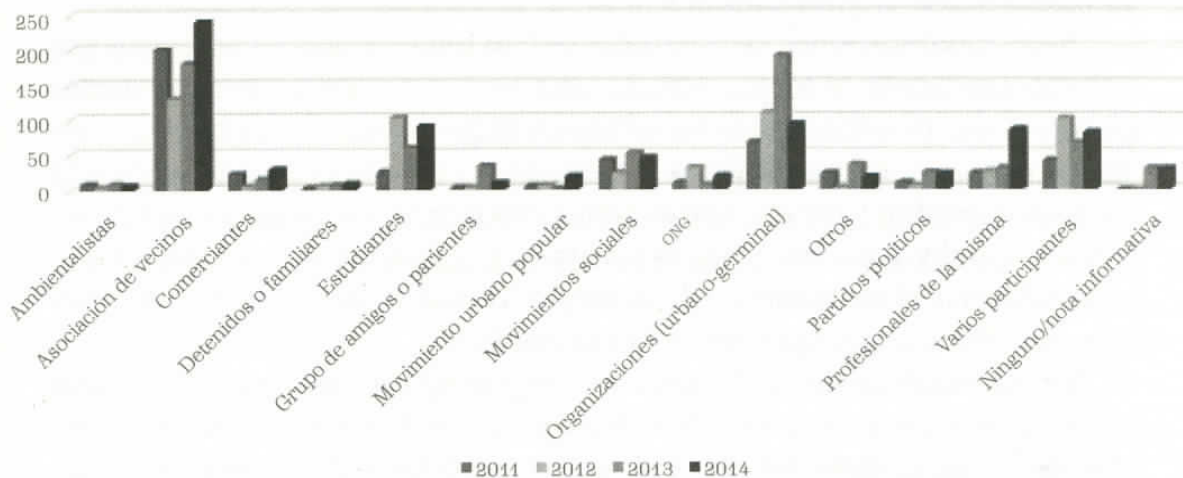
Conformación

En las últimas décadas se incorporaron grupos sociales de zonas que hasta la década de los noventa no tomaron parte en el activismo social, como las clases medias y altas, los sectores populares de las zonas céntricas, organizaciones vecinales, barriales y pueblos rurales periféricos. En el caso de las organizaciones de pueblos semirurales de la periferia metropolitana, se llegaron a conformar frentes para el apoyo mutuo que vincularon a organizaciones campesinas e indígenas, respaldados por una identidad común, en donde además del enfrentamiento a proyectos específicos, se propusieron concepciones culturales diferentes sobre los objetivos del desarrollo, como fueron: el Frente Coalocotla contra el libramiento la Venta-Colegio Militar (1996), en el que participaron el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, la organización del Pueblo en Lucha por la Tierra San Andrés Totoltepec y San Pedro Mártir; y el conflicto por el proyecto de nuevo aeropuerto metropolitano en Atenco (2001), donde surgió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Así las asociaciones de vecinos de colonias de clase media, barrios y pueblos aparecen como los colectivos que más se movilizan; sin embargo, su número de miembros e influencia está limitado por su escala territorial. Son seguidos por los miembros de las organizaciones urbano-gremiales que, como se ha desarrollado en el documento, han representado un conjunto nuevo y dinámico de organizaciones vinculadas al trabajo en la vía pública y a la informalidad.

Las movilizaciones con varios participantes son muestra de la importancia que han adquirido los frentes de múltiples organizaciones para reforzarse mutuamente y lograr una mayor presencia y poder de negociación. También las organizaciones de estudiantes han transitado por estos procesos, y en ocasiones han logrado trascender sus instituciones de origen con la organización de movimientos de estudiantes procedentes de diferentes escuelas.

Gráfica 5
TIPO DE COLECTIVO MOVILIZADO, 2011-2014



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Conflictos Urbanos de la ZMVM, UAM-X, IPPUR, UFRJ.

Pese a estos logros, un factor común de los movimientos contemporáneos ha sido el predominio de resistencias enfocadas mayoritariamente en problemas locales o sectoriales, lo que ha fragmentado la acción social, dándoles poca influencia efectiva, ya que se mantuvieron aislados de la sociedad civil no organizada,¹⁸ debido a su poca capacidad para influir en escalas más amplias, como las políticas gubernamentales, la planeación del desarrollo metropolitano y la generación de proyectos urbanos de largo plazo.

A MANERA DE CONCLUSIÓN: CAMBIOS ESTRUCTURALES Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

La sustitución del patrón de acumulación de capital con intervencionismo estatal por el neoliberal, operado paulatinamente en México desde inicios de la década de los ochenta, ha dado lugar a cambios notorios en

¹⁸Consulta Mitofsky levantó una encuesta en 2003 que reveló que uno de cada cuatro consultados en la Ciudad de México se declaró afectado por alguna manifestación. Adicionalmente, 63.2 por ciento de los encuestados en general no simpatiza con los ciudadanos que realizan marchas o plantones.

la estructura económica urbana de la ZMVM, entre los que destacan la desindustrialización absoluta y relativa, y la terciarización polarizada, donde domina la informalidad.

Estas modificaciones estructurales se han manifestado en la morfología urbana mediante la formación de una trama de corredores terciarios como elementos estructuradores urbanos y la generalización de nuevos artefactos urbanos, como edificios y conjuntos corporativos o de vivienda de lujo cerrados, centros comerciales, megaconjuntos de vivienda de interés social y grandes infraestructuras de vialidad y transporte; y en el polo informal, el surgimiento de múltiples concentraciones de vendedores fijos, semifijos o ambulantes en la vía pública.

La informalización del comercio y el transporte urbano ha enfrentado a quienes ejercen estas actividades y a los gobiernos locales encargados de la regulación del uso del ámbito público y de la prestación de servicios, lo cual ha llevado a la organización social gremial de los usuarios y de los prestadores irregulares, en algunos casos a su articulación al movimiento urbano popular tradicional, y a la adopción de prácticas de relación clientelar y corporativa con los partidos políticos en el gobierno.

Aunque se mantienen las movilizaciones del MUP tradicional por suelo, vivienda y servicios básicos, cada vez más sometido al control corporativo y clientelar por los partidos políticos gobernantes, y en gran medida convertido en gestor de crédito y programas de vivienda pública, las nuevas condiciones urbanas han llevado a un desplazamiento del activismo social hacia los sectores de ingresos medios y altos, afectados en su patrimonio y sus condiciones materiales de vida barrial por los megaproyectos privados y públicos localizados en la antigua estructura urbana. Estas movilizaciones defensivas los enfrentan simultáneamente al capital inmobiliario-financiero convertido en protagonista de la economía urbana y la producción de la ciudad, y a los gobiernos locales que promueven sus grandes desarrollos, les otorgan incentivos y subsidios, y legislan en su favor.

Los movimientos populares urbanos reivindicaban —y continúan haciéndolo— el acceso a las condiciones esenciales de vida urbana, como vivienda y servicios; se oponían en mayor o menor medida al sistema económico y político imperante; los nuevos movimientos de grupos de ingresos medios y altos defienden fundamentalmente su patrimonio y calidad de vida frente a los riesgos ambientales y sociales derivados de

las acciones público-privadas, sin desarrollar ningún grado de acción antisistémica.

Sin embargo, ambas formas de movilización ponen en evidencia las contradicciones actuales del desarrollo urbano capitalista neoliberal, en particular el autoritarismo de las intervenciones urbanas público-privadas, y buscan frenar sus efectos negativos más visibles de este modo de construir y reconstruir la ciudad; son, por lo tanto, a pesar de sus diferencias de clase, acciones colectivas que reivindican el derecho a la ciudad, y embriones y manifestaciones de una posible democracia urbana participativa.

FUENTES CONSULTADAS

- ÁLVAREZ, L. (2005), *Distrito Federal: sociedad, economía, política y cultura*, México, UNAM-CIICH.
- ÁVILA, J. A. (2010), *Informe del Secretario de Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)*, México, inédito.
- CASTRO NIETO, G. G. (1990), "Intermediarismo político y sector informal: el comercio ambulante en Tepito", *Revista Nueva Antropología*, abril, año/vol. XI, núm. 37, México, UNAM.
- CESOP (2005), *Reporte temático núm. 2 Comercio Ambulante*, México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados LIX Legislatura.
- CONNOLLY, P. (2009), *Comparación entre las encuestas de origen y destino en la Zona Metropolitana del Valle de México 1983, 1994 y 2007, construcción de un sistema de indicadores para la medición de la movilidad urbana en la Ciudad de México*, Taller II, México, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, UAM-A, disponible en <http://www.occm.uam.mx/archivos/11/file/Connolly.pdf>, consultada el 1 de agosto de 2011.
- CRUZ FLORES, A. (2012), "En 4 años se detuvo a más de 54 mil ambulantes", *La Jornada*, 16 de febrero 2012, sección Capital, México.
- DDF (Departamento del Distrito Federal) (1997), *Estudio básico para el reordenamiento del comercio en vía pública*, México, DDF.
- GDF (Gobierno del Distrito Federal) (2010a), "Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012", *Gaceta Oficial del Distrito Federal*, 22 de marzo de 2010, México, GDF.
- (2010b), *Cuarto Informe de Gobierno del Distrito Federal, Anexo Estadístico*, México, GDF.
- (2014), *Segundo Informe de Gobierno del Distrito Federal, Anexo Estadístico*, México, GDF.
- GEM (Gobierno del Estado de México) (2010), *Quinto Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto*, Toluca, GEM.

- HABER, P. (2009), "La migración del Movimiento Urbano Popular a la política de partido en el México contemporáneo", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 71, núm. 2, abril-junio, México, UNAM, IIS.
- HUESCA REYNOSO, L. (2008), "Análisis de los cambios de la población masculina en el sector formal e informal urbano de México", *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 23, núm. 3, septiembre-diciembre, México, El Colegio de México.
- INEGI (2004), *Encuesta Nacional de Empleo 2003*, Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.
- (2007), *Encuesta origen-destino de los residentes de la ZMVM, 2007*, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, Aguascalientes, México.
- , E. P. Cobos, F. J. Moreno Galván (2014) *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014*, Aguascalientes, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
- JARAMILLO PUEBLA, N. A. (2007), "Comercio y espacio público. Una organización de ambulantes en la Alameda central", *Alteridades*, vol. 17, núm. 34, julio-diciembre, México, UAM-I.
- LEGORRETA, J. (2004), "De cocodrilos al pulpo verde, el transporte dominante de la urbe", *La Jornada*, 23 de septiembre de 2004, sección Cultura, México.
- MARTÍNEZ, F. (2012), "DF: casi medio año de bloqueos", *El Universal*, 3 de enero, sección DF, México.
- PINZÓN RONDÓN, A. M., L. Briceño Ayala, J. C. Botero, P. Cabrera y M. N. Rodríguez (2006), "Trabajo infantil ambulante en las capitales latinoamericanas", *Salud pública de México*, septiembre-octubre, año/vol. 48, núm. 5, Cuernavaca, Instituto Nacional de Salud Pública.
- PRADILLA COBOS, E. et al. (2012), *Zona Metropolitana del Valle de México: cambios demográficos, económicos y morfológicos*, Reporte del proyecto de investigación de ciencia básica UAM-X/Conacyt, México, inédito.
- PUENTE ESPINOSA, L. F. (2011), "Versión estenográfica de la conferencia de prensa ofrecida por el secretario de Transporte del Gobierno del Estado de México el 2 de mayo de 2011", Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de México, disponible en http://www.edomex.gob.mx/transp/doc/pdf/notas/CONFERENCIA_PRENSA_1.pdf, consultada el 1 de agosto de 2011.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, J. y B. Navarro Benítez (1999), *El transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de México en el siglo XX*, México, GDF.
- SETRAVI, (2009), *Tercer informe de la Secretaría de Transporte y Vialidad 2009*, México, GDF.
- (2010a), *Cuarto informe de la Secretaría de Transporte y Vialidad 2010*, México, GDF.
- (2010b), *Programa Integral de Transporte y Vialidad 2007-2012*, México, GDF.
- SILVA LONDOÑO, D. A. (2010), "Comercio ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México (1990-2007)", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 72, núm. 2, abril-junio, México, UNAM-IIS.
- ZAREMBERG, G. (2010), "Hexágono versus árbol: casos atípicos en la organización del comercio informal en el Distrito Federal", *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 36, México, Flacso.

Las zonas metropolitanas: reflexiones teóricas y estudios en el centro del país se terminó en la Ciudad de México durante el mes de octubre del año 2015. La edición impresa sobre papel de fabricación ecológica con *bulk* a 80 gramos, estuvo al cuidado de la oficina litotipográfica de la casa editora.



Las relaciones sociales bajo las cuales se construye la ciudad capitalista y el proceso urbano, a la luz de la crítica de la economía política, permiten establecer planteamientos teóricos y metodológicos orientados a proponer su comprensión. Por eso es importante ir más allá de los hechos inmediatos en las ciudades y preguntarnos sobre las relaciones económicas y políticas entre las fuerzas presentes en las urbes como los que vienen comandando el desarrollo de las relaciones capitalistas en América Latina.

Manifestaciones de estos hechos en las ciudades son los movimientos sociales urbanos que en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, surgen a partir de la reestructuración urbana que implicó el crecimiento de procesos de terciarización y desindustrialización, cuyos impactos principales en la población fueron el desempleo y un aumento de la informalidad, creando una sinergia expresada en cambios territoriales y el surgimiento de grandes proyectos inmobiliarios, obras viales y modificaciones en el sistema de transporte. Estos procesos de reestructuración económico-territorial generaron conflictos sociales, disminución en las condiciones de vida para sus habitantes y ha dado lugar a la construcción de un sector diverso pero desigual dominado por actividades terciarias de baja productividad orientados al consumo, mientras que las de alta productividad recién han iniciado su crecimiento en nuestro país y siguen dominadas por los países hegemónicos, generando procesos de fragmentación y diferenciación en el sector terciario.



MAPorrúa
librero-editor • México



Universidad
Autónoma
de Tlaxcala

